

Santiago, cinco de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos RIT O-7125-2020, RUC 204003050587-4, caratulados “Delgado Jofré Víctor con Agencia de Viajes y otros”, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, se acogió la demanda de unidad económica, despido injustificado y cobro de prestaciones.

Las demandadas dedujeron recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, lo rechazó.

En contra de este último pronunciamiento, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe, con costas.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones acerca del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho que se propone unificar consiste en “determinar los requisitos de procedencia para la acción de declaración de único empleador; en concreto, si al requisito de dirección laboral común debe adicionarse la acción de subterfugio y/o de simulación, o si bien, al menos debe alegarse o probarse, la existencia de un perjuicio que mediante la declaración de único empleador se busque subsanar”.

Reprocha que la decisión se aparta de la doctrina sostenida en las que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por las Cortes de Apelaciones de Santiago en las causas rol N°2.795-2017 y 1.159-2021, de Concepción en los antecedentes N°76-2015, y por esta Corte en el ingreso N 5.879-2010.

La primera, analiza si para solicitar la declaración de unidad económica o empleador común debe cumplirse el requisito de procesabilidad consistente en que la demandante deba alegar que sus derechos laborales o previsionales han sido vulnerados, concluyendo que conforme al artículo 3° del Código del Trabajo,



el ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la aplicación de su inciso cuarto, deberá considerar lo dispuesto en el artículo 507 del mismo texto legal, en cuanto señala que “... *podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas empresas que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados*”, agregando que, en el caso, ni la demanda ni el mérito del proceso dan cuenta de la existencia de dicha afectación, la que tampoco fue acreditada, por lo que no se ha verificado un presupuesto de la acción de declaración de unidad económica, lo que conlleva su rechazo.

La segunda, desestima debido a defectos en su interposición, un recurso de nulidad mediante el cual la parte demandante cuestionaba la decisión del grado, que no hizo lugar a la demanda de declaración de empleador único, por no haberse planteado conjuntamente con la acción de subterfugio laboral.

La tercera, también rechaza el recurso de nulidad deducido por no configurarse la causal esgrimida, sin perjuicio de agregar que actualmente no existe la figura del subterfugio independiente de la declaración del acogimiento de la acción del artículo 3 inciso 4° del Código del Trabajo, pues la Ley N°20.760 obliga a accionar bajo el supuesto que varias empresas constituyen un solo empleador y sólo con esta declaración determinar algún efecto como es la existencia de un subterfugio.

Y la última, sostuvo que la norma que regula el subterfugio tiene por objeto desincentivar la realización de actividades o actos jurídicos que impliquen afección de derechos laborales por parte de los empleadores, asociando precisas y determinadas sanciones a las formas comisivas que describe, además de señalar el marco de las sanciones pecuniarias susceptibles de ser impuestas, las que deben ser graduadas atendiendo la entidad de la conducta que se investiga y la extensión del comportamiento lesivo, lo que se grafica mediante la obligación de considerar, para su imposición, el número de trabajadores afectados.

Tercero: Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que las demandadas formularon sobre la base, en lo que interesa, en las causales del artículo 478 letra e), en relación con los artículos 459 N°4 y 6 del Código del Trabajo, y aquella prevista en el artículo 477 del mismo Código.

Como fundamento de la decisión, sostuvo en torno al primer motivo, que la omisión en la falta de ejercicio de la acción de subterfugio carece de vocación modificatoria, ya que no se advierte de la redacción de los artículos 3 y 507 del Código del Trabajo, la dependencia una de la otra.

En relación con el artículo 3° inciso cuarto del Código, sostuvo que se previó la acción para obtener la declaración de unidad económica en el evento que el empleador por razones económicas se haya organizado en diversas unidades



productivas; en cambio, el artículo 507 del Código del Trabajo, se orientó a sancionar la organización cuando se ha instalado o adquirido con la intención de perjudicar a los trabajadores, por lo que debe ser desestimado.

Respecto de la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, desestimó la infracción del artículo 507 del Código del Trabajo, por los fundamentos ya expuestos.

Cuarto: Que, no obstante constatarse la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de dicha materia de derecho, habida cuenta de lo resuelto en las sentencias invocadas por las recurrentes con lo decidido en la que se impugna, lo cierto es que esta Corte estima que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto, coincide en que la acción de declaración de empleador único es independiente y puede subsistir sin necesidad de ser deducida en conjunto con la denuncia de subterfugio laboral.

Quinto: Que, para ello, cabe hacer presente que esta Corte ya se pronunció sobre el particular, mediante sentencia dictada en autos rol N°99.611-2020, que desarrolla el criterio refrendado con posterioridad en causa N°10.060-2022, entre otras, de acuerdo al cual el examen de lo dispuesto en el artículo 507 inciso primero del Código del Trabajo y en el artículo 3° en su texto vigente luego de la publicación de la Ley N°20.760, de 9 de julio de 2014, considerando los cambios experimentados por dichos preceptos, sus objetivos en relación con el bien jurídico que amparan y el análisis que la doctrina ha efectuado a su respecto, permite colegir que *“la acción de declaración de unidad económica tutela el ejercicio de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores, respecto de quienes constituyen su verdadero empleador conforme al principio de primacía de la realidad, para lo cual no se instituye como requisito acreditar la afectación, pues si así se asumiera, se referiría a situaciones pasadas, ya verificadas, en las que solo es posible una sanción, mas no el goce actual de los derechos que se aseguran con la figura, que desde una mirada protectora, busca facilitar su ejercicio pleno sin que se altere la individualidad legal determinada de cada entidad que la conforma relacionado con otros ámbitos regulados por el ordenamiento jurídico.*

Se trata de una norma que anticipa la protección de los derechos y evita el perjuicio que se produciría al encontrarse impedidos los trabajadores de ejercer – como en este caso – sus derechos colectivos referido a quienes son en los hechos sus empleadores”.

Sexto: Que, dando por reproducidos los argumentos desarrollados en los fallos citados, se unifica la jurisprudencia en cuanto se declara que la manera correcta de entender la materia de derecho planteada en el recurso es la que



determina que con la reforma introducida a los artículos 3° y 507 del Código del Trabajo por la Ley N° 20.760, de 2014, la declaración de único empleador no es considerada *per se* fraudulenta, atenta la evolución de la norma y de su exégesis, de manera que si se constata por la judicatura la concurrencia de los supuestos normativos del citado artículo 3°, declarará sin más la existencia de un único empleador, con las consecuencias inherentes en materia de derechos individuales y colectivos del trabajo, bastando que quien acciona – trabajadores u organizaciones sindicales – consideren en abstracto que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados, sin exigirse la comprobación de un perjuicio real, supuesto que se ubica más bien en un ámbito infraccional, al que le siguen la aplicación de las sanciones del inciso tercero numeral tres del artículo 507 del código del ramo, cuando el subterfugio ha tenido resultados acreditados como consecuencia de eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención, acción esta última que por lo demás no ha sido la ejercida por la demandante.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no yerra la Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar el recurso de nulidad promovido por las demandadas y descartar la existencia de un defecto en la interposición de la demanda al solicitar la declaración de empleador único sin denunciar a la vez la comisión de actos de subterfugio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo previsto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 133.250-2023.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras María Angelica Repetto G., María Cristina Gajardo H., ministra suplente señora Eliana Quezada M., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Raúl Patricio Fuentes M. No firma el abogado integrante señor Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, cinco de junio de dos mil veinticuatro.





En Santiago, a cinco de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

